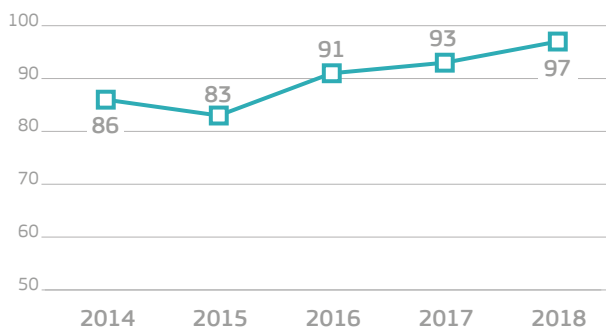


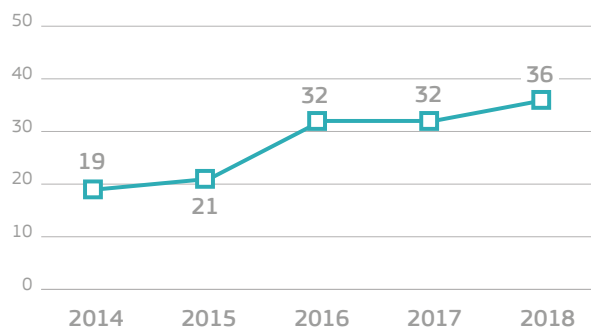
Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea

Informe anual de 2018

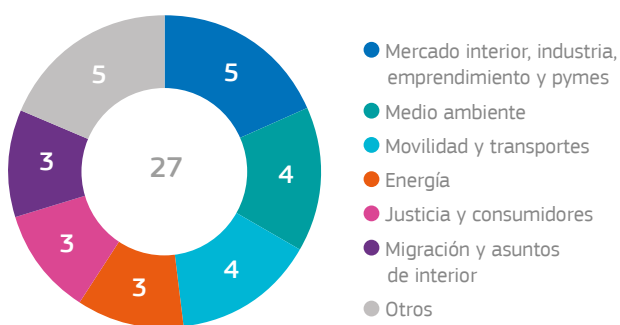
Procedimientos de infracción incoados a 31 de diciembre de 2018



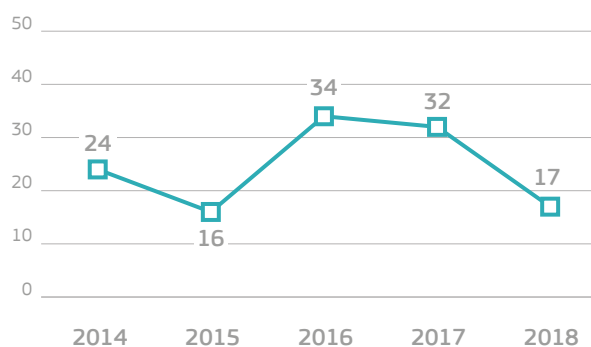
Procedimientos de infracción por transposición tardía incoados a 31 de diciembre de 2018



Nuevos procedimientos de infracción incoados en 2018: principales ámbitos políticos



Nuevos procedimientos de infracción por transposición tardía incoados en 2018



1 Número de procedimientos de infracción incoados por no transponer una Directiva de la Unión al ordenamiento jurídico nacional dentro del plazo fijado.



Sentencias pertinentes de los tribunales europeos:

El Tribunal de Justicia dictaminó, entre otras cosas, que España:

- no había cumplido sus obligaciones, ya que no había adoptado las medidas necesarias para transponer la Directiva sobre la denuncia de irregularidades² al ordenamiento jurídico nacional en el plazo fijado³;*
- había discriminado y excluido a los pequeños transportistas del mercado del transporte por carretera, al obligar a los transportistas a disponer de un número mínimo de vehículos para obtener una autorización de transporte público⁴;*
- había incumplido una sentencia anterior del Tribunal⁵, ya que 17 de las 43 aglomeraciones de más de 15 000 equivalentes habitante afectadas por la primera sentencia aún no habían sido equipadas con sistemas de recogida o tratamiento de las aguas residuales urbanas. El Tribunal de Justicia condenó a España a pagar una suma a tanto alzado de 12 millones EUR y una multa coercitiva de 10 950 000 EUR por cada semestre de retraso hasta la plena ejecución de la sentencia⁶.*

En decisiones prejudiciales, el Tribunal de Justicia dictaminó, entre otras cosas, lo siguiente:

- El acceso de la policía a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído no puede definirse como una injerencia «grave» en los derechos fundamentales. Dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de esas personas y la interferencia puede estar justificada por el objetivo de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de «delitos»⁷.*
- La legislación nacional permite a un empleador despedir a una trabajadora embarazada en el contexto de un despido colectivo, siempre que comunique a dicha trabajadora las causas que justifiquen tal actuación⁸.*
- La multa impuesta por no declarar dinero efectivo a la entrada o salida de la Unión (dicha multa puede ser de hasta el doble del importe no declarado) es contraria al Derecho de la Unión, especialmente respecto del Reglamento sobre controles de efectivo⁹.*

2 Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión relativa al Reglamento (UE) n.º 596/2014.

3 Comisión/España, C-599/17.

4 Reglamento (CE) n.º 1071/2009, Comisión Europea / Reino de España, C-181/17.

5 Comisión/España, C-343/10.

6 Comisión/España, C-205/17 y comunicado de prensa del Tribunal n.º 120/18.

7 Ministerio Fiscal, C-207/16.

8 Porras Guisado, C-103/16.

9 Lu Zheng, C-190/17.